

DOCUMENTO CONCEPTUAL

CRIES

(Coordinadora Regional de Investigaciones Económicas y Sociales)

“El rol de la sociedad civil en la prevención de violaciones masivas de los derechos humanos en América Latina y el Caribe”

Uno de los más recientes informes sobre Responsabilidad de Proteger del Secretario General de Naciones Unidas ha resaltado la necesidad de fortalecer la dimensión preventiva de protección colectiva de poblaciones en riesgo, tratando de “asistir a Estados bajo estrés” y explorar políticas estructurales y medidas operacionales que contribuirían a construir sociedades resilientes al genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y limpieza étnica. Pero este llamado no ha sido acompañado de mecanismos fuertes de prevención a niveles nacionales, sub-regionales y regionales para poder responder efectivamente a las señales de alerta temprana sobre el deterioro de situaciones.

En el 2011, una iniciativa global fue lanzada por el Auschwitz Institute for Peace and Reconciliation (AIPR), con el apoyo de las Naciones Unidas (vía la Oficina del Asesor Especial para la Prevención de Genocidio), para entrenar a oficiales de gobierno y compartir con ellos herramientas prácticas que les facilitarían la toma de acciones efectivas para detener crisis en curso y construir capacidades para la prevención de atrocidades masivas.

En 2012, una red regional surgió de la iniciativa global, cuando 18 Estados decidieron constituir la Red Latinoamericana para la Prevención del Genocidio y Atrocidades Masivas para poder tratar asuntos específicos y poder desarrollar estrategias y políticas a medida para su propio contexto. Esto ha sido un indicador de que los gobiernos han tomado interés, y están al tanto de la necesidad de adoptar nuevas directivas para construir mecanismos efectivos para responder a amenazas e incrementar los prospectos para la paz en sus territorios. Es importante señalar que los puntos focales de esta red son representantes de Estados heterogéneos que tienen una amplia gama de formas para procesar y reaccionar ante tensiones entre los principios de soberanía nacional y de no intervención por parte de actores externos en asuntos nacionales, y la defensa de derechos humanos, en especial aquellos vinculados a los cuatro crímenes enmarcados en la Responsabilidad de Proteger.

Muchos analistas consideran que América Latina es un “emprendedor normativo” así como un “campeón” en la promoción de marcos legales internacionales para apoyar la protección de derechos humanos. Históricamente la región ha consolidado una tradición jurídica en torno a estos temas en el contexto de un sistema regional e internacional de ley e instituciones altamente desarrollado. En la práctica el Sistema Interamericano de Derechos Humanos ha jugado un rol clave en tratar y lidiar en casos de abusos masivos y violaciones a los derechos humanos en la región por medio de una estructura interconectada compuesta por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (basada en Washington D.C.), la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en San José, Costa Rica) y el Instituto Interamericano de Derechos Humanos (también basado en San José, Costa Rica). Muchos casos han sido tomados por el sistema, tanto durante como después de los regímenes militares y conflictos armados de la región. El sistema

Interamericano también está vinculado a otros mecanismos internacionales, y constituye uno de los sistemas regionales de derechos humanos más notorios en el mundo.

En un mundo donde las relaciones internacionales han dado paso a la gobernanza regional y global, lo que implica la inclusión de una amplia gama de actores estatales y no-estatales, la prevención de crímenes atroces debe ser un esfuerzo colaborativo y multidimensional. Por ende, los decisores políticos a nivel internacional y regionales, la comunidad académica, los gobiernos, los defensores de derechos humanos y los representantes de la sociedad civil que trabajan las áreas de construcción de paz y desarrollo, deben estar involucrados en acciones conjuntas multi-actoriales. Son todos actores con recursos y capacidades complementarias y un rol dentro de la protección y la prevención en el marco de procesos multi-actoriales.

Dentro de ese contexto, CRIES (un ThinkTank basado en una red regional de sociedad civil constituido hace 34 años) y la Fundación Stanley, creen que el involucramiento y el fortalecimiento de los agentes no-gubernamentales en América Latina y el Caribe es esencial en el desarrollo de iniciativas sólidas y sustentables donde una sociedad civil pro-activa puede compartir su experiencia en el ámbito, y en conjunto con otros actores clave, mejorar la capacidad del Estado para mantener una estructura nacional para la resiliencia a los crímenes atroces y genocidio, así como asegurar el rendimiento de cuentas y el respeto por el estado de derecho y la gobernanza democrática.

El objetivo general de este proyecto es realizar una contribución para prevenir futuras violaciones sistemáticas a los derechos humanos y la ejecución de crímenes atroces en América Latina y el Caribe, sean estos perpetrados por actores Estatales o no-Estatales, tanto en tiempos de crisis como en tiempos de paz, así como fortalecer a los esfuerzos de defensa y promoción de la sociedad civil con el objetivo de apoyar agendas más amplias de derechos humanos y prevención de atrocidades masivas a niveles nacionales, regionales e internacionales.

Con ese propósito, CRIES y la Fundación Stanley proponen una serie de actividades que llevarán a la creación de una red de sociedad civil latinoamericana y caribeña para la prevención de atrocidades masivas que en un futuro cercano estará en capacidad de interactuar y trabajar de forma conjunta y constructiva con puntos focales de la Red Latinoamericana para la Prevención del Genocidio y Atrocidades Masivas coordinada por AIPR. Esta red podría convertirse en un modelo a seguir en otras regiones del mundo que también forman parte de la red global.

Se espera que una vez consolidada la red, sus miembros promuevan el diseño y la implementación de políticas y mecanismos para la prevención de atrocidades masivas a nivel nacional, regional e internacional. La red regional contribuirá, cuando y donde sea posible, en las iniciativas lideradas por la Red Latinoamericana para la Prevención del Genocidio y Atrocidades Masivas constituida por puntos focales nacionales y coordinada por AIPR. A su vez, se espera que constituya su propio plan de trabajo, y que lleve adelante iniciativas propias a diferentes niveles, siempre basándose en enfoques constructivos, proactivos y multisectoriales.